

Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo

Estimado Presidente Moreno,

Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos dedicadas a temas ambientales, laborales, de migrantes y refugiados, y de fe, y consejos de pueblos indígenas que suscribimos la presente nos dirigimos a usted para expresar nuestras preocupaciones ante la próxima Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, durante la cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) patrocinará un evento el 14 de junio, junto con la Cámara de Comercio de EEUU, un grupo privado de cabildeo. Principalmente, nos preocupa la ausencia de voces de sociedad civil en la conferencia y el limitado alcance de las soluciones propuestas. Le instamos asegurar que las necesidades y retos humanitarios y de derechos humanos que existen en la región no queden al margen, pidiendo que se dirija la asistencia del BID hacia iniciativas desarrolladas conjuntamente con la sociedad civil enfocadas en mejorar la calidad de vida y sustento a nivel local.

Es un momento crucial para discutir la multitud de factores que impulsan el desplazamiento forzado y la migración de miles de familias, individuos y niños de los países del “Triangulo Norte”, Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2016, el número de homicidios en cada uno de los tres países fue más que suficiente para constituir una ‘epidemia de violencia’, según las Naciones Unidasⁱ. No se respetan los derechos laborales, lo cual se ve reflejado en las quejas interpuestas en contra de Guatemala y Honduras bajo el Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroaméricaⁱⁱ. Además, Guatemala sigue siendo uno de los países más letales en el mundo para los defensores de derechos laboralesⁱⁱⁱ. También hay altos niveles de violencia contra mujeres y niñas y personas LGBTI^{iv}. Los países del triangulo norte también enfrentan grandes desafíos para combatir la corrupción, la violencia de las maras y el crimen organizado. Los operativos militares y abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad han sido un factor agravante en el desplazamiento en la región. Los informes de derechos humanos de 2016 del Departamento del Estado de EEUU documentan el involucramiento de fuerzas de seguridad en crímenes como el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, violencia sexual y corrupción^v.

A la vez, el acceso a la justicia para la mayoría de los ciudadanos es ilusorio y la mayoría de los crímenes, incluyendo la corrupción y los abusos que involucren a oficiales de alto nivel, permanecen en la impunidad. Muchos de los más vulnerables en la región son familias indígenas y campesinas que viven con la amenaza del desplazamiento forzado, las expropiaciones ilegales y la inseguridad relacionada con proyectos extractivos e hidroeléctricas. De forma similar, las inversiones en agricultura industrial y la siembra de monocultivos como el aceite de palma han tenido un impacto devastador en la seguridad y subsistencia de dichas comunidades^{vi}. Los pueblos indígenas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos quienes denuncian abusos y buscan proteger sus tierras arriesgan convertirse en víctimas de difamación, intimidación, denuncias sin base legal, criminalización y asesinatos. Guatemala y Honduras están clasificados entre los países más peligrosos del mundo para defensores ambientales^{vii}. Las personas que huyen de esta violencia, incluyendo mujeres, familias y niños, han buscado protección internacional, no solamente en los Estados Unidos sino también en México, en donde el año pasado hubo un número récord de solicitudes de asilo, hechas en su mayoría por centroamericanos.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil de los Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala y El Salvador han hecho llamados a sus respectivos gobiernos para dar prioridad a acciones que protejan a los más vulnerables y que aseguren el respeto de los derechos internacionales de los refugiados y los que busquen asilo. Igualmente, muchos han pedido que, si se concede asistencia externa, esta sea otorgada para fortalecer los esfuerzos para combatir la corrupción, así como para fortalecer la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, con el fin de combatir la criminalización, asegurar un salario digno para trabajadores y promover el respeto de los derechos humanos. Las comunidades de estos países también han reiterado una y otra vez que los esfuerzos para construir economías sostenibles e incluyentes que reduzcan la pobreza y mejoren los medios de subsistencia sólo se podrán lograr por medio de programas transparentes que se realicen conjuntamente con los ciudadanos locales, que también respeten plenamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Desafortunadamente, esta conferencia hace lo contrario, creando una plataforma para inversionistas corporativos, excluyendo a las voces de la sociedad civil, y proponiendo la "creación de empleos" como la respuesta principal para los desafíos económicos y de seguridad. De hecho, en una reciente entrevista con Reuters, Presidente Moreno, usted describió a la reunión de Miami como un intento de "producir 'un choque de inversión' para crear empleos y prevenir la migración"^{viii}.

Este enfoque esconde los desafíos complejos de la gobernanza y de derechos humanos, reforzando los impulsores económicos de la desigualdad. Mientras que la creación de empleos es importante, la inversión sin derechos laborales básicos perpetuará la inestabilidad y la pobreza, lo cual no resuelve las causas de la migración. A la vez, la inversión pública y privada en proyectos de energía, agricultura e infraestructura ha tenido impactos negativos generalizados en las comunidades vulnerables de la región. En vez de apoyar la tenencia de la tierra y la seguridad alimenticia de los pequeños agricultores, este enfoque probablemente acelerará la transferencia de miles de hectáreas de tierra, necesarias para la agricultura de subsistencia, a manos de grandes empresas agroindustriales y transnacionales, exacerbando el desplazamiento y la migración forzada. Además, este enfoque descuida por completo la necesidad de defender los derechos humanos de las comunidades pobres y marginadas, así como de mujeres, familias y niños.

Los préstamos del BID en la región han reflejado estas estrategias en el pasado, y a pesar de la existencia de salvaguardias sociales y ambientales que deben prever y mitigar los impactos adversos de los proyectos, las comunidades afectadas por dichos proyectos regularmente plantean quejas sobre sus impactos^{ix}. Por ejemplo, el BID ha apoyado "el manejo forestal sostenible de las comunidades forestales" en la Reserva del Biosfera Maya^x, donde, el 2 de junio de 2017, el ejército de Guatemala llevó a cabo desalojos forzosos de comunidades que se encuentran dentro de la Reserva; unas 700 personas han buscado refugio en México y más desalojos están programados para el día de hoy^{xi}. Las inversiones del Banco en intermediarios financieros tales como Banco Ficohsa y el Banco Industrial añaden otro nivel de complejidad. Es notable que, en el momento en que el Ombudsman del Asesor de Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional publicó un informe extremadamente crítico de los préstamos de la CFI a Ficohsa en 2016^{xii}, la CII anunció que estaba expandiendo su apoyo al banco hondureño, el cual ha financiado a compañías ligadas al conflicto violento, como la Corporación Dinant^{xiii}.

Además, el apoyo del BID a iniciativas fronterizas en el Triángulo Norte también suscita preocupación. En la frontera El Salvador-Honduras, el BID financia actualmente un programa destinado a "reducir el subregistro y mejorar la identidad legal en zonas de frontera mediante el levantamiento de información sobre los niños, niñas y adolescentes salvadoreños no registrados y que residen en la zona fronteriza con Honduras"^{xiv}. En la frontera entre Guatemala y México, el Banco está dispuesto desde 2015 a financiar programas que fortalezcan las reformas fiscales, mejoren la infraestructura fronteriza y contribuyan a "un mejor control fronterizo de los migrantes que cruzan la frontera en su camino hacia Estados Unidos"^{xv}. La asistencia técnica para El Salvador fue proporcionada sin la publicación de los documentos del proyecto; en Guatemala, se designó al Ministerio de Defensa de Guatemala como el organismo ejecutor, lo cual provocó oposición desde la sociedad civil. Ambos proyectos generan dudas sobre el alcance completo y los objetivos del financiamiento, sobre qué apoyo se proveerá, si lo haya, para poblaciones vulnerables y sobre cómo el Banco asegurará que los proyectos no contribuyan a violaciones de los derechos, reconocidos internacionalmente, de refugiados y quienes solicitan asilo.

Ante estas preocupaciones, le exhortamos a que el BID utilice la próxima conferencia para entablar una conversación más amplia que pueda identificar una respuesta efectiva al desplazamiento forzado y la migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador. El Banco debe reconocer las razones complejas que originan este fenómeno, debe analizar cuidadosamente sus propias intervenciones para lograr crear un espacio viable en donde pueda existir un liderazgo significativo y robusto de la sociedad civil que participe en cualquier discusión sobre los modelos de desarrollo sostenible. Indiscutiblemente, los planes de desarrollo regional deben elaborarse sólo después de consultar con las comunidades y la sociedad civil de la región. Asimismo, las iniciativas específicas de financiación sólo deben aprobarse previa consulta –incluyendo el consentimiento libre, previo e informado cuando sea aplicable–, así como una consideración seria y un remedio apropiado para los impactos adversos en todas las etapas de preparación e implementación del proyecto.

La inversión privada y la creación de empleo deben ir a la par con la protección de los derechos humanos, esto es el respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, así como la aplicación de derechos laborales, el

apoyo a las poblaciones vulnerables, el respeto de las salvaguardias ambientales y la participación efectiva de la comunidad. La inobservancia sobre estas cuestiones puede llegar a destruir los medios de vida locales y exacerbar la difícil situación de quienes huyen de la violencia. Hacemos un llamado al Banco Interamericano de Desarrollo para que demuestre su liderazgo afrontando estos desafíos durante la próxima conferencia y más allá.

Sinceramente,

Centroamérica y México

ADES Santa Marta – El Salvador

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) -- Panamá

Asociación de Mujeres Profesionales por el desarrollo Integral/ AMPDI – Nicaragua

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) - Guatemala

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) - Guatemala

Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) - Guatemala

Consejo de Pueblos K'iche' (CPK) - Guatemala

FIATPAX HAGAMOS LA PAZ - Nicaragua

Instituto de Derecho Ambiental A.C. – México

Red Jesuita con Migrantes – El Salvador

Seguridad en Democracia (SEDEM) – Guatemala

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala-UDEFEGUA

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) - Guatemala

XAJ-K, Autoridades Ancestrales del Pueblo Q'eqchi', Norte de Guatemala

Regional e Internacional

Accountability Counsel

Amazon Watch

American Friends Service Committee (AFSC)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Bank Information Center (BIC)

Both ENDS

Center for International Environmental Law (CIEL)

Chile Sustentable - Chile

Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)

Crude Accountability

Ecosistemas - Chile

Forest Peoples Programme

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) – Argentina

Global Rights

Global Witness

Guatemala Human Rights Commission/USA

International Accountability Project

International Rivers

International Trade Union Confederation (ITUC)

Jamaa Resource Initiatives

JASS (Just Associates)

Latin America Working Group (LAWG)

Maryknoll Office for Global Concerns

Movimiento Sueco por la Reconciliación - SweFOR

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)

Other Worlds

PBI-USA

Sisters of Mercy of the Americas' Institute Justice Team

Women's Refugee Commission

CC:

Gina Montiel

Gerente del Departamento de Países de Centroamérica, México, Panamá y la República Dominicana y Representante en Panamá Banco Interamericano de Desarrollo

Mark Edward Lopes

*Director Ejecutivo por los Estados Unidos
Banco Interamericano de Desarrollo*

José Mauricio Silva

*Director Ejecutivo por Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
Banco Interamericano de Desarrollo*

Juan Bosco Martí Ascencio

*Director Ejecutivo por la República Dominicana y México
Banco Interamericano de Desarrollo*

Alex Severens

*Director, Office of Development Results and Accountability
U.S. Treasury Department*

ⁱ *Violencia siguió desatada en el Triángulo Norte: 14 mil 870 homicidios en 2016*, Departamento 19, Honduras, 7 de enero de 2017, <http://www.departamento19.hn/index.php/elcamino/ddhh/42993-violencia-siguio-desatada-en-el-triangulo-norte-14-mil-870-homicidios-en-2016-.html>

ⁱⁱ Ver información sobre la queja contra Guatemala (<https://ustr.gov/issue-areas/labor/bilateral-and-regional-trade-agreements/guatemala-submission-under-cafta-dr>) y contra Honduras (<https://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/HondurasSubmission2012.pdf>)

ⁱⁱⁱ Un encuesta sobre violaciones de los derechos sindicales encontró que, en Guatemala, no hay “ninguna garantía” del derecho a la asociación, negociación colectiva o el derecho al paro. Ver <http://survey.ituc-csi.org/Guatemala.html#tabs-1>.

^{iv} Un estudio reciente encontró que la violencia sexual de género fue un factor principal en la decisión de muchas mujeres y niñas de migrar. Ver: Kids in Need of Defense, *Childhood Cut Short: Sexual and Gender-based Violence Against Central American Migrant and Refugee Children*, June 7, 2017 (<https://supportkind.org/resources/childhood-cut-short/>)

^v U.S. State Department, Human Rights Reports, <https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/>

^{vi} Ver, por ejemplo, información sobre los desalojos en el Polochic en Guatemala (<http://www.ghrc-usa.org/our-work/current-cases/polochic/>), violencia relacionada al aceite de palma en Guatemala (<http://www.truth-out.org/news/item/33085-guatemalan-activist-murdered-after-court-suspends-palm-oil-company-operations>), conflicto relacionado al aceite de palma y la caña de azúcar (https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-301116-en.pdf), y violencia en Honduras relacionada al conflicto sobre tierras (<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-world-environmental-activism/>, <https://www.theguardian.com/world/2016/oct/19/honduras-land-rights-activists-killed-unified-peasant-movement>)

^{vii} United Nations, Office of the High Commissioner, Report on Environmental human rights defenders, 2016 English, (<https://www.protecting-defenders.org/pdf.js/web/viewer.html?file=https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/environmentaldefenders.pdf>); and Honduras: the Deadliest Place to Defend the Planet,” Global Witness, January 2017, (<https://drive.google.com/file/d/0B8bQtL9UvhPNRTBVc2hTTG44S0k/view>)

^{viii} U.S. coaxes Mexico into Trump plan to overhaul Central America, By Gabriel Stargardter, May 4, 2017, (<http://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-central-america-idUSKBN1800E4>)

^{ix} Ver, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Mareña Renovables (<http://www.iadb.org/en/mici/me-mici002-2012-marena-renovables-wind-project-mexico-compliance-review-report-published-after-consideration,20488.html>), and other cases filed at the IDB’s Independent Consultation and Investigation Mechanism. (<http://www.iadb.org/en/mici/mici,1752.html>)

^x See project details related to funding for the Maya Biosphere dating back to 2005. (<http://www.iadb.org/en/projects/project-details,1301.html?Country=&Sector=&Status=&query=Maya+biosphere>)

^{xi} Ver comunicado de la Comisión Internacional de Jurista del 5 de junio de 2017 y la alerta del Guatemala Human Rights Commission/USA (<https://ghrcusa.wordpress.com/2017/06/12/700-guatemalans-take-refuge-in-mexico/>)

^{xii} CAO investigation info IFC lending to Ficohsa (http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=209)

^{xiii} Banco Ficohsa will expand its SME portfolio with support from IIC, IIC, 22-12-2016 (<http://www.iic.org/en/media/news/banco-ficohsa-will-expand-its-sme-portfolio-support-iic#.WS7aLxPyyuqA>)

^{xiv} BID sitio del proyecto <http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ES-T1248>

^{xv} Perfil de proyecto para “Programa de Integración Fronteriza Guatemala-Mexico (GU-L1086)”, Inter-American Development Bank (<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39595659>)